



## El agua más cara: lo que cuesta vivir en el Cañito

Por Sergio Arauz<sup>1</sup>

Las 68 familias de la comunidad El Cañito, al sur de la capital salvadoreña, tienen 30 años de vivir sin agua potable y rodeados de comunidades y colonias que sí disponen del servicio. Para obtener el agua que ocupan para los quehaceres del hogar y para tomar significa gastar un dólar día a día, 30 dólares al mes, en un país donde el salario mínimo alcanza los 254 dólares.



“Dicen que da cólera cuando uno se levanta en la mañana, gira la mariposa del chorro (grifo) y no sale agua, y no hay agua para tomar, para bañarse, para limpiar, para nada... Yo no tengo ese problema, yo me levanto todos los días y sé que no tengo nada de agua en la casa, que nunca la he tenido en los últimos 30 años de vivir aquí”, dice Rosa Villalta, sentada en su casa en la entrada de la comunidad El Cañito, al sur de la capital salvadoreña.

La comunidad El Cañito es un grupo de 86 casas que se abrió paso 30 años atrás en las laderas del cerro El Garrobo. Son casas desiguales que muestran que el desarrollo también es desigual entre las familias que pueblan los asentamientos urbanos precarios (AUP) de El Salvador. Por eso hay casas construidas con lámina oxidada: lámina, las paredes, láminas, los techos. También las hay

de cemento y ladrillo; las de suelo de mezcla de concreto; y hasta de las que sobresalen antenas parabólicas de televisión por cable. Lo único que tienen en común todas esas casas es que ninguna tiene un chorro, ninguna goza de un sistema de agua potable.

Entre sus habitantes lo común también es la envidia de ver a las colonias enteras que rodean su comunidad y que tienen agua potable; es el cansancio de escuchar una y otra vez la promesa que algún día habrá al menos un chorro en sus casas; ese el agobio de tener que levantarse temprano a “jalar” agua; es la impotencia por que el dinero se les escapa pagando entre 10 y 39 veces más por lo que cuesta el agua subsidiada que brinda la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANANDA).

“Cuando vinimos no había nada... Aquí, solo estaba el terrenito, la quebrada El Garrobo y el nacimiento de agua”, recuerda Rosa Villalta. El terrenito fue perdiendo espacio cuando la familia Villalta empezó a crecer. La quebrada se ensució cuando en los terrenos de arriba crecieron colonias de clase media que encontraron en el cauce de El Garrobo el lugar perfecto para echar sus aguas servidas. De lo que encontró Rosa Villalta cuando migró del interior del país sólo queda el nacimiento de agua, embovedado en paredes cemento y del que sale una manguera hacia un reservorio construido con ladrillo visto y dispuesto al aire libre. Solo eso. Nada más.

En esa pileta llena de tierra, hojas y ramas, los cargadores de agua llenan cientos de cántaros y la distribuyen por todo El Cañito día a día. Seis cantaradas, un dólar, si es gradas debajo

de la comunidad; 1.50 dólares, si hay que ir gradas arriba. Quién no puede pagar, llega hasta la pileta, espera su turno en la fila, llena su cántaro y repite el proceso una, dos, tres, seis o diez veces, según sea el caso. Ahí lavan ropa o, si el pudor se los permite, hasta se bañan, porque cargar cantaradas de agua también es perder tiempo y hay cosas que hacer en la casa o hay que marchar temprano al trabajo.

“¿Usted sabe lo que es vivir sin agua en la casa? ¿Usted sabe lo que es ver a las comunidades de al lado, ahí no'más en Brisas de Candelaria, en la Aragón, en la San Patricio... en todas esas colonias, en todos lados, hay agua y aquí no hay?... Se siente feo, se siente uno más pobre de lo que realmente es”, dice Yesenia Pineda, da otra guacalada en la pileta y quita el jabón de baño a sus hijos, Fernando y Élmer. “Eso es... No tener agua es pobreza”, repite.

En 2006, un informe del PNUD destacaba que El Salvador contaba con una oferta hídrica que superaba el promedio mundial para abastecer a su población y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de la industria y la agricultura. Los números engañaban, remarcaba el informe, toda vez se ahondaba en las críticas condiciones de acceso al agua que tenía la población y la distribución desigual de la misma. Si a ello se sumaba el deterioro ambiental de los acuíferos salvadoreños, la situación del agua en el país era descrita técnicamente como de “escasez relativa”.

Rosa Villalta no sabe de descripciones técnicas y dibuja una cara de duda cuando escucha que el capital hídrico por persona de El Salvador en 2005 era igual a 2 mil 765 metros cúbicos por año. Con 13 personas viviendo junto a ella, su casa en El Cañito debería disponer de casi 36 mil metros cúbicos cada año. Esos son los números que no concuerdan con la realidad de la familia Villalta.

A la entrada de la casa de Rosa Villalta hay tres barriles. Llenarlos hasta el borde de un agua amarillenta y con rastros de hojas y ramas secas que baja de una quebrada a escasos 70 metros de su vivienda significa pagar entre 3 y 4.50



dólares cada día. “Son seis cántaros, seis viajes, para llenar un barril”, dice Rosa, como quien quiere justificar el precio. Cada cántaro tiene cinco galones; cada barril, 30 galones. Esos 180 galones sirven para todo: bañarse, lavar la ropa, cocinar y, si las hierven y no alcanza el dinero para comprar agua purificada, hasta para tomar. Con un poco menos de 100 galones más y alcanzaría a tener un metro cúbico de agua cada día.

En un año, toda la familia Villalta no consume más de 240 metros cúbicos de agua en su hogar. Aún así, el costo anual que pagan es 39 veces mayor que el de una vivienda con agua potable subsidiada en el área metropolitana. “Se lo pongo barato... Tres dólares diarios son 21 dólares semanales. Al mes, llegamos a los 80 dólares”, redondea Rosa Villalta y prefiere no seguir con sus cuentas.

“Vivir sin agua potable es algo complicado”, dice Manuel de Jesús Hernández. El trabaja recogiendo restos de metal en las quebradas y basureros cercanas. La basura de otros le da de comer a él, a su esposa y sus tres hijos. Cada dos o tres días, se le ve salir con una carretilla de mano de la casa en la que vive desde hace 19 años en El Cañito. En ella, Manuel de Jesús lleva 50 libras de hierro viejo y oxidado que equivalen a 22 dólares en el mercado del reciclaje informal. En un mes bueno, 300 dólares seguros. El 10% de todo ello se gasta mes a mes en la compra de agua. “¿Agua potable?, no. Agua no más, de esa agua que vienen a dejar las pipas (camiones cisternas) o de la que se saca del ojo de agua y acarrear hasta la casa. Para tomar, hay que comprar a parte... Eso es pisto (dinero) a parte”, dice.

Esa disparidad del precio del agua potable es la historia del día a día en El Cañito. Del otro lado del cerro El Garrobo, en la colonias de clase media que crecieron a mediados de los años 90 y para las que se perforó un pozo y se dispuso de una motobomba, un hogar que consume hasta 30 metros cúbicos de agua mensuales paga un precio subsidiado de 2.29 dólares. ¿Injusto? Bastante para las cuentas de la familia Villalta y Hernández. Lo dicen los números que ellos no conocen: el precio fijo a un negocio pequeño de comida que no tenga contador de agua no pasa de los 35 dólares fijos por mes; las compañías de agua embotellada, toda vez que tienen sus propios sistemas de bombeo, pagan seis centavos de dólar por metro cúbico extraído del subsuelo y que ya tratado puede vender hasta en 525 dólares.

A finales del quinquenio presidencial pasado (2004 - 2009), ANDA manejaba números esperanzadores: 75 cada 100 salvadoreños y salvadoreñas tenían acceso a agua potable en sus hogares a través de cañerías; 90 de cada



100, acceso a una fuente mejorada de agua potable. El dato reflejaba única y exclusivamente las zonas urbanas del país donde ellos suministraban el servicio. El Cañito y sus 86 familias entrarían en esa última categoría.

“Fuente mejorada” es un término técnico demasiado amplio, critican especialistas en el tema y explican que dentro de esa categoría se incluye a las personas que se abastecen de chorros comunitarios, cañerías de algún vecino, camiones cisterna, pozos, ojos de agua, ríos o quebradas. Ahí, lo “potable” se pierde en los cántaros, en las ollas, en los barriles, en donde sea que se guarde el agua; o queda relegado a la manipulación o al descuido de la misma.

Así, cuando al sustantivo “agua” hay que agregarle el adjetivo “potable”, los costos de las familias de El Cañito aumentan. Cinco galones de agua potable, lo que popularmente se conoce en El Salvador como “garrafón”, valen dos dólares. Si tuvieran que comprar 10 garrafones cada mes, serían 20 dólares y las ganancias que deja el recoger chatarra se escapan de entre las manos como agua. “No

siempre se puede... Así que hervimos, porque ahí uno ve el agua clarita pero no sabe que animales trae”, dice Manuel de Jesús Hernández.

“Y mire que el dinero no alcanza para nada... Y cuando no hay trabajo, no hay dinero”, explica Carmen Villalta, y prosigue: “Y es frustrante porque siempre hay que darle de comer a los hijos, hay que cuidarlos... y, mire, en serio, para todo se necesita el agua: la comida, la ropa, el aseo, la salud... Todo. Por eso, cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, hay que ir a acarrearla a la quebrada o allá arriba la bomba de ANDA”.

La bomba de ANDA queda a 300 metros de la casa de la familia Villalta en línea recta. Pero en el caso de El Cañito, esa distancia es una cuesta de gradas amontonadas y empinadas que zigzaguean por la ladera del cerro El Garrobo y dividen a la comunidad en dos. Los que viven más cerca de la bomba se turnan el derecho de conectar una manguera de 50 metros de largo y llenan los barriles y piletas de sus casas. Los que viven abajo, solo les queda subir con los cántaros a cuesta.





**“A finales del quinquenio presidencial pasado (2004-2009), ANDA manejaba números esperanzadores: 75 cada 100 salvadoreños y salvadoreñas tenían acceso a agua potable en sus hogares a través de cañerías; 90 de cada 100, acceso a una fuente mejorada de agua potable. El dato reflejaba única y exclusivamente las zonas urbanas del país donde ellos suministraban el servicio. El Cañito y sus 86 familias entrarían en esa última categoría”.**

De lo que habla Carmen Villata es del costo invisible que no se logra cuantificar más que en tiempo, en este caso, en horas mujer: llenar los tres barriles son más de dos horas de trabajo y eso se cargan, literalmente, en los brazos, los hombros o la cabeza de las mujeres de la comunidad. “El escaso o difícil acceso al agua duplica las actividades de la mujer, lo cual no le permite tener una participación más activa en roles productivos”, detallaba el Cuaderno sobre desarrollo Humano de la oficina del PNUD en El Salvador, en octubre de 2006.

El mismo punto lo retomó el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), un organismo no gubernamental, al presentar un análisis del cumplimiento los Objetivos de desarrollo del milenio en el tema de agua potable y saneamiento en El Salvador, en septiembre de 2009. Según el informe, la actividad doméstica de la provisión de agua refleja un alto grado de desigualdad de género, limitando el tiempo de las mujeres que se dedican a los quehaceres domésticos, una actividad que todavía es considerada como un trabajo inactivo.

Diferentes organizaciones civiles, como Red de Agua y Saneamiento de El Salvador (RASES), valoran que el país necesitaría una inversión de 256 millones de dólares en nuevos sistemas de agua potable para incrementar la cobertura a 100 por ciento en cinco años. Otros, como el Banco Mundial, estiman que el estado salvadoreño debería invertir entre 70 y 75 millones de dólares anuales para alcanzar acceso universal en agua y saneamiento en ese mismo período.

Pero la realidad económica del país es otra. En 2008, la inversión estatal en agua potable y saneamiento alcanzó 20 millones de dólares; y para el período comprendido entre 2010 y 2014, ANDA y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) firmaron un convenio para ampliar estos servicios en 169 municipios a un costo de 60 millones de dólares, procedentes de Fondo del Agua de la cooperación española y el BID.

“¿Y usted cree que los que mandan se acuerdan de quienes viven en este hoyo? ¿Sabe cuántas veces nos han prometido el agua potable? Seis o siete veces”, dice Rosa Villalta,

hace una pausa y prosigue: “Vinieron de la alcaldía de San Salvador, de ANDA, de organizaciones no gubernamentales, de la junta directiva, de todos lados y nada. ¿Y podemos seguirles creyendo?”

Hace un año, Esperanza, la hija mayor de Rosa Villalta, intercalaba su mirada entre su hijo y los barriles de agua de su casa. Las cuentas que hace su madre las ha escuchado una y otra vez hasta llegar al cansancio: “Si ANDA nos pusiera el agua potable, dos veces le pagaba el recibo”, había dicho. Lo decía y el tono de su voz denotaba una mezcla de rabia y de desazón, de impotencia. Ahora, habla más cargada de rabia: “¿Cuánto costaría meter el agua? Son 68 casas, más de 300 personas, y tenemos más de 25 años de estar esperando que nos ponga el agua potable. ¿Quiéren que paguemos por la instalación, por la perforación del pozo, por la bomba, por todo? Miré como vivimos, ¿usted cree que no lo pagaríamos? ¡Lo pagamos todo si es necesario!”

